

Señores:

JUZGADO DIECISIETE (17º) ADMINISTRATIVO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.
RADICADO: 76001-33-33-005-2022-00175-00.
DEMANDANTES: JUAN GUALI REMIGIO.
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en la carrera 7 # 7 – 21 Torre B Piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el NIT. 860.026.518 – 6, representada legalmente por la Doctora Olivia Stella Viveros Arcila, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.434.260, conforme se acredita con certificado de existencia y representación legal adjunto. Encontrándome dentro del término legal comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** impetrada por el señor **JUAN GUALI REMIGIO** en contra del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por dicha entidad territorial a mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, así como las que contiene el llamamiento en garantía que nos ocupa, en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA.

El 6 de junio de 2024, el Juzgado (17º) Administrativo Oral de Cali, notificó en estados el Auto Interlocutorio No. 395 proferido el 4 de junio de la anualidad, por medio del cual admitió el llamamiento en garantía respecto de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, concediéndole el término de quince (15) días para contestar.

El Despacho notificó electrónicamente el auto admisorio del llamamiento en garantía a mi representada **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, el día 24 de junio de 2024.

El artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, dispone “*El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente*”. Conforme a lo anterior, los días 25 y 26 de junio de 2024, corresponden a los días mencionados.

El término de traslado de quince (15) días para contestar se surtiría desde los días 27 y 28 de junio de 2024, y los días 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y **18** de julio de la anualidad, por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del término previsto para tal efecto.

CAPÍTULO I

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO 1º: no le consta a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, que el 17 de noviembre de 2020, a las 05:30 p.m., el demandante se desplazara en la motocicleta de placas DUL 28F, con los implementos reglamentarios, por la Calle 121 Bis con Carrera 28 D, del barrio Pizamos 3 de la ciudad de Cali, (V).

Es preciso resaltar que, en la demanda, no se vislumbra ningún medio probatorio que sugiera participación alguna del ente territorial demandado, todo lo contrario, se **CONFIESA** que el supuesto accidente de tránsito, ocurrió por la colisión de dos (2) vehículos. Tal y como se observa de las declaraciones extra juicios que militan en el plenario:

NOTARÍA VEINTE DE SANTIAGO DE CALI
VALLE DEL CAUCA
Cra 28 D No 72 W- 14 PISO 2 EL POBLADO II
Tels: 4373219
notariavirtual20@hotmail.com

NOTARÍA 20
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI

6264

**ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO
PARA FINES EXTRAPROCESALES**
(DECRETO 1557 DEL 14 DE JULIO DE 1.989 ARTICULO 1º)

NOTA: Se recepciona la presente declaración a insistencia de el/la/los interesado(a/s), poniendo a su conocimiento lo establecido en el Decreto 2150 de 1.995, Ley 962 de 2005 y el Artículo 7 del Decreto Ley 019 de 2.012 que establece en su contenido lo siguiente: "Prohibición de declaraciones extra juicio. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autondad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento."

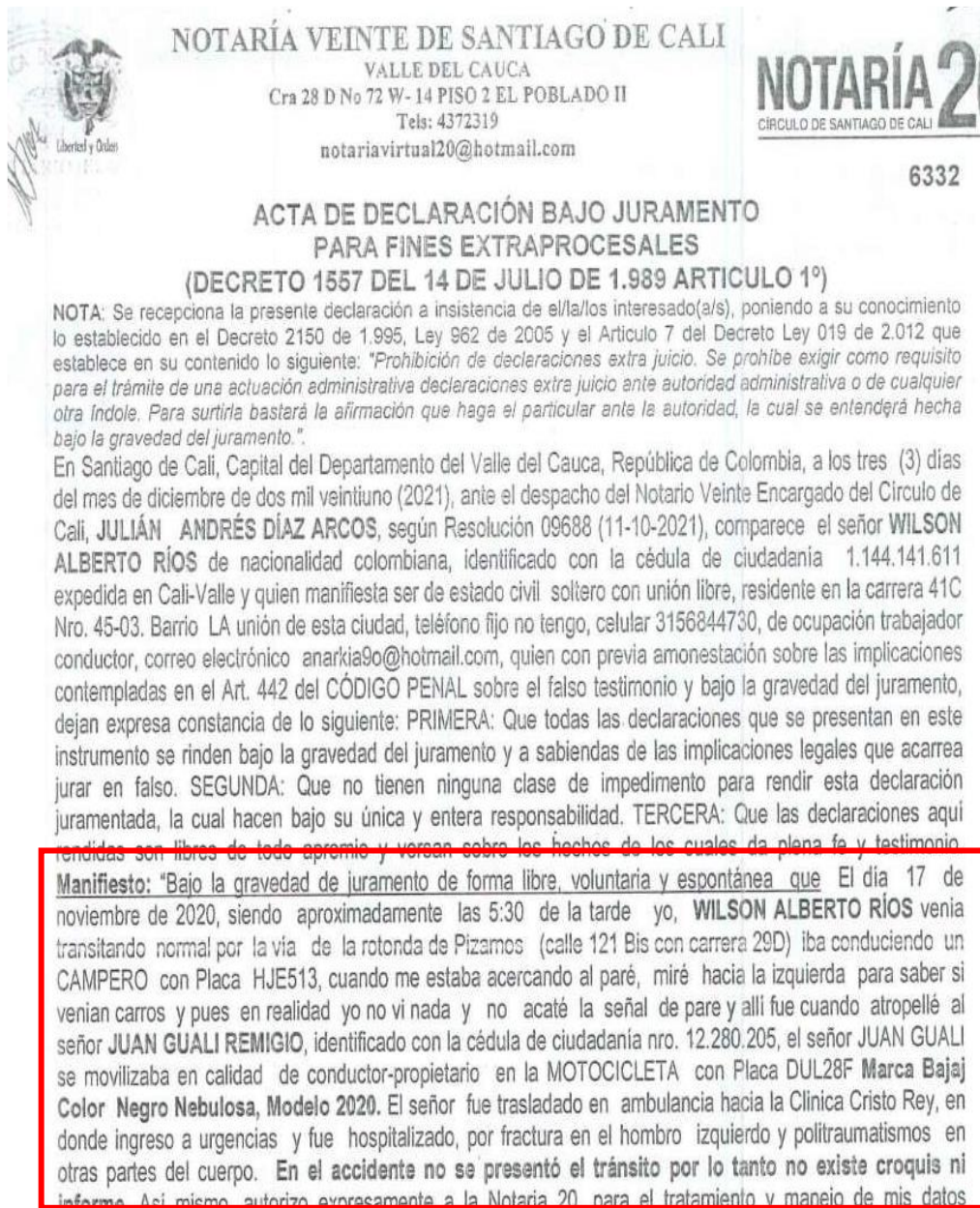
En Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ante el despacho del Notario Veinte Encargado del Círculo de Cali, doctor **JULIAN ANDRÉS DÍAZ ARCOS**, según Resolución 09688 (11 de octubre de 2021), comparece el señor **JUAN GUALI REMIGIO** de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.280.205 expedida en La Plata-Huila, de estado civil soltero con unión libre, residente en la carrera 28C7 Nro. 125-29, Barrio Potrero grande, sector 3 de este municipio, teléfono 3217104468-3207474305, ocupación y/o profesión trabajador de la construcción, correo electrónico: juangualiremigio@gmail.com, quien con previa amonestación sobre las implicaciones contempladas en el Art. 442 del CÓDIGO PENAL sobre el falso testimonio y bajo la gravedad del juramento, dejan expresa constancia de lo siguiente: PRIMERA: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. SEGUNDA: Que no tienen ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual hacen bajo su única y entera responsabilidad. TERCERA: Que las declaraciones aquí rendidas son libres de todo apremio y versan sobre los hechos de los cuales da plena fe y testimonio. **Manifiesto:** "Declaro bajo la gravedad de juramento que el día 17 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 05:30 de la tarde, sufrí un accidente de tránsito en la calle 121 Bis con carrera 28D en el barrio Pizamos 3, cuando iba volteando en el romboy o rotonda, me movilizaba en calidad de conductor-propietario de una **motocicleta** con Placa, DUL28F, Marca, Bajaj, Línea Discover 125 ST-R, Color Negro Nebulosa, Modelo 2020, cilindrada 124, servicio Particular, Número de motor, JEZWKA17161, Nro. de serie-Chasis 9FLA37CY9LAF16783, el accidente ocurrió debido a que un conductor de vehículo se pasó el pare, quien conducía era el señor Wilson Alberto Rios, identificado con CC Nro. 1.144.141.611 expedida en Cali-Valle, quien conducía el Jeep con Placa HJE513, clase de vehículo Campero o camioneta, servicio Particular, cilindraje 4200, modelo 1982, Marca Nissan, Línea, Patrol, con tarjeta de propiedad a nombre García Marín Silvio. En razón a la imprudencia, dicho vehículo colisionó contra mi produciéndome volcamiento, fui trasladado en una ambulancia hacia la Clínica Cristo Rey, de acuerdo a la valoración y exámenes de radiografías que me realizaron; el diagnóstico médico fue traumatismos múltiples, por lo cual me practicaron operación debido a fracturas en el pie-parte del tobillo izquierdo y en el hombro izquierdo. Lo cual demuestro con la Historia Clínica. Adicionalmente declaro que en el accidente no se presentó el tránsito por lo tanto no existe croquis ni informe. Por lo cual haré la respectiva reclamación ante la SEGUROS MUNDIAL. Así mismo, autorizo expresamente a la Notaría 20, para el tratamiento y manejo de mis datos personales y demás datos de acuerdo a la ley vigente, e igualmente solicito se realice mi identificación y autenticación a través del sistema biométrico con que cuenta la Notaría. Habiendo leído la totalidad del documento, manifiesto estar enterado de que un error no corregido en el mismo antes de ser firmado, da lugar a una nueva declaración que conlleva a nuevos gastos. ES TODO: Derechos Notariales \$13.800 + IVA \$2.622 Total \$16.422 (Res. 00536-00545 de enero 22 de 2021). Fp

Firma:

Juan Gual Remigio
JUAN GUALI REMIGIO
C.C. 12280205

Julian Díaz Arcos
JULIAN ANDRÉS DÍAZ ARCOS
Notario Veinte (20) Encargado del Círculo Notarial de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca - República de Colombia

"La fe pública notarial contribuye al fortalecimiento de la PAZ"



Por lo que se encuentra debidamente acreditado el hecho de un tercero, en este caso, del señor Wilson Alberto Ríos, conductor del campero de placas **HJE - 513**.

En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL HECHO 2º: no me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la aseguradora, Compañía sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Pese a lo anterior, de la prueba documental anexa al dossier se visualiza historia clínica del actor la cual no coincide con la fecha de los hechos. Tal y como se muestra en la imagen:



RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: JUAN GUALI REMIGIO	IDENTIFICACION: CC 12280205	HC: 12280205 - CC
FECHA DE NACIMIENTO: 13/7/1973	EDAD: 47 Años	SEXO: M
TIPO AFILIADO: Subsidiado		
RESIDENCIA: CARRERA 28C 125 29	VALLE DEL CAUCA-CALI	TELEFONO: 3217104468
NOMBRE ACOMPAÑANTE:	PARENTESCO:	TELEFONO:
FECHA INGRESO: 21/11/2020 11:45 PM	FECHA EGRESO:	CAMA: H508B
DEPARTAMENTO: HOS005	SERVICIO: HOSPITALARIO	
HOSPITALIZACION 5 PISO		
CLIENTE: COOSALUD EPS SA	PLAN: COOP DE DESARR (COOSALUD EPS) 2020 SUBSIDIADO	

En adicción a lo anterior, en este hecho se hace la transcripción parcial de la historia clínica del paciente JUAN GUALI REMIGIO, siendo necesario indicar que la historia clínica debe ser revisada de manera integral y no únicamente a través de notas aisladas.

La parte actora transcribe parcialmente el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual no es un hecho sino un elemento probatorio.

En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL HECHO 3º: no me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la aseguradora, Compañía sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, de la prueba documental anexa a la foliatura se observa la historia clínica del actor JUAN GUALI REMIGIO, en la cual se consignó que ingresó el 21 de noviembre de 2020. Tal y como se observa:



RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: JUAN GUALI REMIGIO	IDENTIFICACION: CC 12280205	HC: 12280205 - CC
FECHA DE NACIMIENTO: 13/7/1973	EDAD: 47 Años	SEXO: M
TIPO AFILIADO: Subsidiado		
RESIDENCIA: CARRERA 28C 125 29	VALLE DEL CAUCA-CALI	TELEFONO: 3217104468
NOMBRE ACOMPAÑANTE:	PARENTESCO:	TELEFONO:
FECHA INGRESO: 21/11/2020 11:45 PM	FECHA EGRESO:	CAMA: H508B
DEPARTAMENTO: HOS005	SERVICIO: HOSPITALARIO	
HOSPITALIZACION 5 PISO		
CLIENTE: COOSALUD EPS SA	PLAN: COOP DE DESARR (COOSALUD EPS) 2020 SUBSIDIADO	

Luego, **no es cierto** que fue trasladado a la Clínica Cristo Rey, el día 17 de noviembre de 2020.

En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL HECHO 4º: no me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la aseguradora, Compañía sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Pese a lo anterior, debe indicarse que en este hecho se hace la transcripción parcial de la historia clínica del paciente JUAN GUALI REMIGIO, siendo necesario indicar que la historia clínica debe ser revisada de manera integral y no únicamente a través de notas aisladas.

AL HECHO 5º: no me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la aseguradora, Compañía sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, de la prueba documental anexa se visualiza la historia clínica del paciente JUAN GUALI REMIGIO, en la cual no se observa tal incapacidad. Aunado a lo anterior, debe indicarse que la incapacidad laboral es diferente a la incapacidad médico legal.

AL HECHO 6º: es cierto, que el accidente de tránsito no fue conocido por la autoridad de tránsito, razón por la cual no existe certeza sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar del precitado accidente de tránsito.

Sin embargo, es necesario advertir al despacho que de la prueba documental se vislumbran las declaraciones extra juicio rendidas por el demandante y por el señor **WILSON ALBERTO RÍOS**, quienes sostuvieron que el accidente ocurrió por la colisión de dos (2) vehículos sin que se mencionara la existencia de foramen en la vía, espesura de árboles o cualquier otra circunstancia.

AL HECHO 7º: no me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por la Aseguradora, Compañía sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

AL HECHO 8º: no es un hecho, se trata del agotamiento del requisito de procedibilidad para poder acceder a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo e interponer el medio de control de reparación directa.

AL HECHO 9º: no es un hecho, corresponde al agotamiento del requisito de procedibilidad para poder acceder a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

AL HECHO 10º: no es un hecho, se trata del ejercicio del derecho de postulación.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Manifiesto desde ya que **ME OPONGO A LA TOTALIDAD** de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por cuanto no se vislumbran los elementos *sine qua non* para declarar una responsabilidad administrativa en el asunto que nos ocupa. Lo anterior, toda vez que en el presente caso nos encontramos frente a dos (2) circunstancias que eximen de responsabilidad al extremo pasivo del litigio, a saber: (i) el hecho determinante de un tercero que no tomó las medidas preventivas al transitar en la vía, y (ii) no hay prueba de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que supuestamente habría ocurrido el accidente de tránsito, ni prueba que evidencie

que el daño fue producto de un supuesto hueco en la vía ni espesura de árboles, lo que impide imputar el daño al extremo pasivo por la falta de acreditación del nexo causal.

Oposición frente a la pretensión DE RESPONSABILIDAD: ME OPONGO a esta pretensión como quiera que no está demostrada la responsabilidad administrativa del Distrito Especial de Santiago de Cali. Además, por cuanto en el presente caso operó la causal eximente de responsabilidad denominada *hecho determinante de un tercero*. Aunado a que no hay prueba de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que supuestamente habría ocurrido el accidente de tránsito, lo que impide imputar el daño al extremo pasivo por la falta de acreditación del nexo causal.

Oposición frente a la pretensión DE PERJUICIOS: ME OPONGO a que se condene al Distrito Especial de Santiago de Cali, a pagar los perjuicios solicitados por el demandante, porque es consecuencial de la anterior y en el entendido que aquella no debe prosperar, de igual forma esta tampoco.

Concretamente me opongo a los perjuicios así:

OPOSICIÓN FRENTE AL LUCRO CESANTE: me opongo rotundamente a la prosperidad de la pretensión de lucro cesante en cuantía de **\$220.252.000**. En primer lugar, porque el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, no incurrió en ninguna conducta que deviniera en el daño reclamado por el señor **JUAN GUALI REMIGIO**. No obra en el expediente IPAT, ni ningún otro medio de prueba que dé cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente ocurrió el accidente de tránsito que nos convoca. Adicionalmente, según las declaraciones extra juicio aportadas el accidente ocurrió por la colisión de dos (2) vehículos. Y, en segundo lugar, porque no milita contrato laboral, certificación laboral, afiliación al sistema de seguridad social, comprobantes de pago, ni ningún medio probatorio que permita advertir que el actor ejerce alguna actividad laboral, lo que no permite tener certeza del valor de la supuesta remuneración al momento del accidente.

Vale la pena resaltar que el honorable Consejo de Estado, no admite presunción alguna respecto a los ingresos de una persona, los cuales en este caso no se encuentran acreditados. Luego, al no existir prueba del ingreso económico de la actora se torna improcedente su reconocimiento.

OPOSICIÓN FRENTE AL PERJUICIO MORAL: es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en la suma pretendida por la parte demandante, primero, por cuanto no está probada ninguna actuación ni omisión del Distrito Especial de Santiago de Cali, que ocasionara el daño reclamado por la víctima, segundo, la pretensión es evidentemente especulativa y equivocadamente tasada. Nótese como el Consejo de Estado, en Acta del 28 de agosto de 2014, para una lesión que se enmarca en una gravedad igual o superior al 50% reconoce el equivalente de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el primer nivel de cercanía, afectiva.

Sin embargo, en el caso estudiado, con la historia clínica del señor **JUAN GUALI REMIGIO**, no se logra establecer razonadamente que la gravedad de la lesión fuera igual o superior al 50%, para ser acreedor a una indemnización de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para él.

Es por ello que, la suma deprecada de cien (100) SMLMV, solicitada por el demandante; resulta exorbitante, dado que en el presente proceso no existe dictamen de pérdida de capacidad laboral que acredite una gravedad del 50%. En virtud de lo anterior, la pretensión invocada por la parte demandante evoca un evidente afán de lucro.

OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO A LA SALUD: me opongo rotundamente a la prosperidad de este perjuicio. En primer lugar, porque el Distrito Especial de Santiago de Cali, no tuvo injerencia alguna en el citado accidente. Segundo, no existe dictamen pericial que dé cuenta del presunto, pero no probado daño a la salud.

En el caso que nos ocupa no hay prueba de pérdida de capacidad laboral como tampoco prueba médica que permita equiparar las lesiones que sufrió el señor **JUAN GUALI REMIGIO**, con las que padece una persona que es declarada en estado de invalidez.

Aunado a lo anterior, el actor pretende el equivalente de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que se torna excesivamente exagerada.

OPOSICIÓN FRENTE A LA PRETENSIÓN DEL IPC: ME OPONGO a la indexación de la condena, por sustracción de materia, en tanto que, resulta consecencial a las anteriores pretensiones, y al ser improcedente, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo.

OPOSICIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA: respecto, de esta pretensión debe indicarse al Despacho que la misma no puede considerarse, por cuanto se refiere al cumplimiento de disposiciones normativas.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, POR ENCONTRARSE CONFIGURADA LA CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD “HECHO DE UN TERCERO”.

Es necesario indicar que el presunto accidente de tránsito padecido por el señor **Juan Gualí Remigio**, el pasado 17 de noviembre de 2020, en la calle 121 Bis con carrera 28 D del barrio Pizamos 3 de la ciudad de Cali, no fue por responsabilidad del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**. Por el contrario, el accidente se produjo por el hecho de un tercero, esto es, por la omisión del pare del conductor del vehículo tipo Jeep. Tal y como lo manifestó el señor **WILSON ALBERTO RÍOS**, en la declaración extra juicio que se muestra:

 NOTARÍA VEINTE DE SANTIAGO DE CALI
VALLE DEL CAUCA
Cra 28 D No 72 W- 14 PISO 2 EL POBLADO II
Tels: 4372319
notariavirtual20@hotmail.com

NOTARÍA 20
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI

6332

**ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO
PARA FINES EXTRAPROCESALES
(DECRETO 1557 DEL 14 DE JULIO DE 1.989 ARTICULO 1º)**

NOTA: Se recepciona la presente declaración a insistencia de el/la/los interesado(a/s), poniendo a su conocimiento lo establecido en el Decreto 2150 de 1.995, Ley 962 de 2005 y el Artículo 7 del Decreto Ley 019 de 2.012 que establece en su contenido lo siguiente: "Prohibición de declaraciones extra juicio. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtir la basta la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento."

En Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los tres (3) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ante el despacho del Notario Veinte Encargado del Círculo de Cali, **JULIÁN ANDRÉS DÍAZ ARCOS**, según Resolución 09688 (11-10-2021), comparece el señor **WILSON ALBERTO RÍOS** de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía 1.144.141.611 expedida en Cali-Valle y quien manifiesta ser de estado civil soltero con unión libre, residente en la carrera 41C Nro. 45-03. Barrio LA unión de esta ciudad, teléfono fijo no tengo, celular 3156844730, de ocupación trabajador conductor, correo electrónico anarkia90@hotmail.com, quien con previa amonestación sobre las implicaciones contempladas en el Art. 442 del CÓDIGO PENAL sobre el falso testimonio y bajo la gravedad del juramento, dejan expresa constancia de lo siguiente: PRIMERA: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. SEGUNDA: Que no tienen ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual hacen bajo su única y entera responsabilidad. TERCERA: Que las declaraciones aquí rendidas son libres de todo apremio y versan sobre los hechos de los cuales da plena fe y testimonio.

Manifiesto: "Bajo la gravedad de juramento de forma libre, voluntaria y espontánea que El día 17 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde yo, **WILSON ALBERTO RÍOS** venía transitando normal por la vía de la rotonda de Pizamos (calle 121 Bis con carrera 29D) iba conduciendo un CAMPERO con Placa HJE513, cuando me estaba acercando al paré, miré hacia la izquierda para saber si venían carros y pues en realidad yo no vi nada y no acaté la señal de pare y allí fue cuando atropellé al señor **JUAN GUALI REMIGIO**, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 12.280.205, el señor **JUAN GUALI** se movilizaba en calidad de conductor-propietario en la MOTOCICLETA con Placa DUL28F Marca Bajaj Color Negro Nebulosa, Modelo 2020. El señor fue trasladado en ambulancia hacia la Clínica Cristo Rey, en donde ingreso a urgencias y fue hospitalizado, por fractura en el hombro izquierdo y politraumatismos en otras partes del cuerpo. En el accidente no se presentó el tránsito por lo tanto no existe croquis ni informe. Así mismo, autorizo expresamente a la Notaria 20, para el tratamiento y manejo de mis datos

Por tal motivo, se procede a colegir que el accidente ocurre por la omisión del señor **WILSON ALBERTO RÍOS** de acatar la señal de tránsito de PARE, siendo el único responsable de las lesiones generadas al actor. Lo anterior, se confirma con la declaración que también rindió el señor **JUAN GUALI REMIGIO**, cuando sostuvo lo siguiente:



NOTARÍA VEINTE DE SANTIAGO DE CALI
VALLE DEL CAUCA
Cra 28 D No 72 W- 14 PISO 2 EL POBLADO II
Tels: 4373219
notariavirtual20@hotmail.com

NOTARÍA 20
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI

6264

**ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO
PARA FINES EXTRAPROCESALES**

(DECRETO 1557 DEL 14 DE JULIO DE 1.989 ARTICULO 1°)

NOTA: Se recepciona la presente declaración a insistencia de el/la/los interesado(a/s), poniendo a su conocimiento lo establecido en el Decreto 2150 de 1.995, Ley 962 de 2005 y el Artículo 7 del Decreto Ley 019 de 2.012 que establece en su contenido lo siguiente: "Prohibición de declaraciones extra juicio. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento."

En Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ante el despacho del Notario Veinte Encargado del Circulo de Cali, doctor **JULIAN ANDRÉS DÍAZ ARCOS**, según Resolución 09688 (11 de octubre de 2021), comparece el señor **JUAN GUALI REMIGIO** de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.280.205 expedida en La Plata-Huila, de estado civil soltero con unión libre, residente en la carrera 28C7 Nro. 125-29, Barrio Potrero grande, sector 3 de este municipio, teléfono 3217104468-3207474305, ocupación y/o profesión trabajador de la construcción, correo electrónico: juangualiremigio@gmail.com, quien con previa amonestación sobre las implicaciones contempladas en el Art. 442 del CÓDIGO PENAL sobre el falso testimonio y bajo la gravedad del juramento, dejan expresa constancia de lo siguiente: PRIMERA: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. SEGUNDA: Que no tienen ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada, la cual hacen bajo su única y entera responsabilidad. TERCERA: Que las declaraciones aquí rendidas son libres de todo apremio y versan sobre los hechos de los cuales da plena fe y testimonio. **Manifiesto:** "Declaro bajo la gravedad de juramento que el día 17 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 05:30 de la tarde, sufrí un accidente de tránsito en la calle 121 Bis con carrera 28D en el barrio Pizamos 3, cuando iba volteando en el romboy o rotonda, me movilizaba en calidad de conductor-propietario de una **motocicleta** con Placa, DUL28F, Marca, Bajaj, Línea Discover 125 ST-R, Color Negro Nebulosa, Modelo 2020, cilindrada 124, servicio Particular, Número de motor, JEZWKA17161, Nro. de serie-Chasis 9FLA37CY9LAF16783, el accidente ocurrió debido a que un conductor de vehículo se pasó el pare, quien conducía era el señor Wilson Alberto Rios, identificado con CC Nro. 1.144.141.611 expedida en Cali-Valle, quien conducía el Jeep con Placa HJE513, clase de vehículo Campero o camioneta, servicio Particular, cilindraje 4200, modelo 1982, Marca Nissan, Línea, Patrol, con tarjeta de propiedad a nombre García Marín Silvio. En razón a la imprudencia, dicho vehículo colisionó contra mi produciéndome volcamiento, fui trasladado en una ambulancia hacia la Clínica Cristo Rey, de acuerdo a la valoración y exámenes de radiografías que me realizaron; el diagnóstico médico fue traumatismos múltiples, por lo cual me practicaron operación debido a fracturas en el pie-parte del tobillo izquierdo y en el hombro izquierdo. Lo cual demuestro con la Historia Clínica. Adicionalmente declaro que en el accidente no se presentó el tránsito por lo tanto no existe croquis ni informe. Por lo cual haré la respectiva reclamación ante la SEGUROS MUNDIAL. Así mismo, autorizo expresamente a la Notaría 20, para el tratamiento y manejo de mis datos personales y demás datos de acuerdo a la ley vigente, e igualmente solicito se realice mi identificación y autenticación a través del sistema biométrico con que cuenta la Notaría. Habiendo leído la totalidad del documento, manifiesto estar enterado de que un error no corregido en el mismo antes de ser firmado, da lugar a una nueva declaración que conlleva a nuevos gastos. ES TODO: Derechos Notariales \$13.800 + IVA \$2.622 Total \$16.422 (Res. 00536-00545 de enero 22 de 2021). Fp

Firma:

Juan Gual Remigio
JUAN GUALI REMIGIO
C.C. 12280205

Julian Díaz Arcos
JULIAN ANDRÉS DÍAZ ARCOS
Notario Veinte (20) Encargado del Circulo Notarial de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca - República de Colombia

"La fe pública notarial contribuye al fortalecimiento de la PAZ"

Lo antes expuesto, es una clara muestra de la configuración del hecho de un tercero como causal que exime de toda responsabilidad al extremo pasivo.

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado¹ ha indicado que cuando la conducta de un tercero causa el daño, debe liberarse de toda responsabilidad al extremo pasivo de la litis así:

"(...)

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 11 de mayo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2003-02994-01 (40590).

De entrada debe precisarse que la causa extraña es la única eximente de responsabilidad que se admite cuando el daño es causado en el ejercicio de actividades peligrosas. **Esa causal exonerativa es aquella ajena o extrema del funcionamiento mismo del elemento peligroso (fuerza mayor, hecho de la víctima o de un tercero)".** (Énfasis propio).

En concordancia con lo manifestado por la jurisprudencia, es claro que, si el daño alegado se produjo como consecuencia del hecho de un tercero, el demandado será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso concreto, es evidente que el factor relevante y adecuado que incidió en la ocurrencia del presunto accidente del 17 de noviembre de 2020, fue la omisión de la señal de PARE por parte del señor WILSON ALBERTO RÍOS. Por tanto, es jurídicamente inviable imputar responsabilidad al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**.

En definitiva, el anterior contexto nos permite concluir que la falta de cumplimiento de las normas de tránsito, fue determinante y exclusivo en la producción del daño, exponiendo a los usuarios de las vías a un peligro inminente. Lo que claramente conllevó a la generación del daño que ahora pretenden endilgar al **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**. Es decir, dado que el hecho generador del daño reside en la conducta de un tercero, debe exonerarse de toda responsabilidad al asegurado al configurarse el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad.

En ese sentido, solicito al señor juez, declarar probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO Y DEL NEXO CAUSAL.

Para que se pudiera configurar la responsabilidad a cargo del extremo pasivo de la litis, era necesario que la parte actora desde la presentación de la demanda probara el factor estructural de la responsabilidad, esto es, la falla del servicio y el nexo causal entre la supuesta acción y/u omisión desplegada por el ente territorial y los perjuicios pretendidos por los demandantes. Sin embargo, no hay prueba de la existencia del foramen en la vía. Mucho menos de alguna relación causal entre el estado de la vía y el accidente de tránsito. Máxime que la conducta de los dos (2) conductores incidió en el resultado dañoso al transitar sin la prudencia debida, pues debe recordarse que según las declaraciones extra juicios que militan en el libelo introductorio, se trató de la colisión de dos (2) vehículos. Por lo anterior, no es posible atribuir al extremo pasivo de la litis la ocurrencia del suceso y mucho menos afirmar que hay a su cargo una obligación indemnizatoria.

La jurisprudencia ha definido el nexo causal, como la relación de causalidad existente entre el daño y la acción u omisión atribuible al agente generador del mismo. Se tiene que es un elemento naturalístico que permite la estructuración del daño y la consecuente responsabilidad en cabeza del Estado. Dicho esto, encontramos que las lesiones padecidas por el señor **Juan Gualí Remigio**, equivocadamente pretenden ser imputadas al Distrito Especial de Santiago de Cali, con el simple dicho, ya que no existen y tampoco se solicitaron medios probatorios con los que se pudiera clarificar: **i)** las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, y **ii)** que el supuesto hecho se debiera al incumplimiento del contenido obligacional del ente territorial, siendo ello la causa de las lesiones alegadas y no otro factor externo, imputable al hecho de un tercero, tal y como se puede acreditar en este evento.

En este tipo de eventos, es menester recordar que la carga de la prueba de demostrar el nexo

causal está en el demandante. Si este no acredita que sus lesiones devienen del hueco en la vía y/o espesura de los árboles y que ello corresponde a la falta de mantenimiento de la malla vial, las pretensiones deben ser negadas. Adicionalmente, las pruebas que tiene el extremo activo demuestran y acreditan el daño, pero no las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el accidente de tránsito.

Máxime, cuando no se cuenta con IPAT, testigos presenciales de los hechos o cualquier otro medio de prueba que acreditara las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito.

No obstante, lo anterior, es factible arribar a las siguientes conclusiones: i) que el accidente acaeció por la colisión de dos (2) vehículos, iii) que el conductor del jeep desatendió la norma de tránsito que indicaba que debía realizar el pare, tal y como se observa en la imagen:

Manifiesto: "Bajo la gravedad de juramento de forma libre, voluntaria y espontánea que El día 17 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde yo, **WILSON ALBERTO RÍOS** venia transitando normal por la vía de la rotonda de Pizamos (calle 121 Bis con carrera 29D) iba conduciendo un CAMPERO con Placa HJE513, cuando me estaba acercando al paré, miré hacia la izquierda para saber si venian carros y pues en realidad yo no vi nada y no acaté la señal de pare y allí fue cuando atropellé al señor **JUAN GUALI REMIGIO**, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 12.280.205, el señor **JUAN GUALI** se movilizaba en calidad de conductor-propietario en la MOTOCICLETA con Placa DUL28F Marca Bajaj Color Negro Nebulosa, Modelo 2020. El señor fue trasladado en ambulancia hacia la Clínica Cristo Rey, en donde ingreso a urgencias y fue hospitalizado, por fractura en el hombro izquierdo y politraumatismos en otras partes del cuerpo. **En el accidente no se presentó el tránsito por lo tanto no existe croquis ni informe.** Así mismo, autorizo expresamente a la Notaria 20, para el tratamiento y manejo de mis datos personales y demás datos de acuerdo a la ley vigente, e igualmente solicito se realice mi identificación y autenticación a través del sistema biométrico con que cuenta la Notaria. Habiendo leído la totalidad del documento, manifiesto estar enterado(a) de que un error no corregido en el mismo antes de ser firmado, da lugar a una nueva declaración que conlleva a nuevos gastos. **ES TODO".** Derechos Notariales \$13.800 + IVA \$2.622 Total \$16.422 (Res. 00536-00545 de 2021). ds

En conclusión, no hay prueba de la falla del servicio al no encontrarse demostrada la presunta irregularidad en la vía (hueco), la espesura de los árboles y el nexo causal entre el supuesto hecho generador y el daño alegado. Como se ha analizado, la parte actora no probó que en el lugar de los hechos hubiera un foramen y que este fuera la causa eficiente del accidente de tránsito, todo lo contrario, de las declaraciones extra juicios se logra advertir la colisión entre dos (2) vehículos. Configurándose la causal eximente de responsabilidad denominada hecho determinante de un tercero, quien fue el gestor de las lesiones que ahora se reclaman. Desvirtuando así, cualquier nexos causal que pretenda endilgar la parte actora. Por tanto, al no encontrarse acreditada la falla del servicio y el nexos, es claro que jurídica y jurisprudencialmente resulta improcedente declarar responsabilidad administrativa por no encontrarse acreditado un elemento estructural de la misma.


Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

3. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MÍ PROCURADA.

Respetuosamente solicito al juzgador de instancia, tener como excepciones contra el medio de control de reparación directa, todas las planteadas por el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, las cuales coadyuvo, en cuanto favorezcan los intereses de mí procurada.

4. OPOSICIÓN FRENTE AL LUCRO CESANTE POR INDEBIDA ACREDITACIÓN.

En el presunto accidente de tránsito ocurrido el 17 de noviembre de 2020, no hubo responsabilidad por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali. Al encontrarse configurada la causal eximente de responsabilidad: el hecho determinante de un tercero; al ejercer la actividad peligrosa de conducción sin acatar las normas de tránsito. En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. La parte actora pretende el reconocimiento de dicho perjuicio sin cumplir con la carga probatoria correspondiente. En el expediente no milita contrato laboral, desprendibles de pago de salario, transferencia bancaria, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en el régimen contributivo, u otro medio probatorio que acredite la vinculación laboral del actor, y esta no puede ser susceptible de presunción. Todo lo contrario, en la historia clínica del demandante se dejó registrado que se atendía por el SOAT, adicionalmente, se consignó que pertenecía a la EPS COOSALUD del régimen subsidiado. Tal y como se observa en la imagen:



CLÍNICA
CRISTO REY

RESUMEN EPICRISIS

PACIENTE: JUAN GUALI REMIGIO		IDENTIFICACION: CC 12280205	HC: 12280205 - CC
FECHA DE NACIMIENTO: 13/7/1973	EDAD: 47 Años	SEXO: M	TIPO AFILIADO: Subsidiado
RESIDENCIA: CARRERA 28C 125 29	VALLE DEL CAUCA-CALI		TELEFONO: 3217104468
NOMBRE ACOMPAÑANTE:	PARENTESCO:	TELEFONO:	
FECHA INGRESO: 21/11/2020 11:45 PM	FECHA EGRESO:	CAMA: H508B	
DEPARTAMENTO: HOS005	SERVICIO: HOSPITALARIO		
HOSPITALIZACION 5 PISO			
CLIENTE: COOSALUD EPS SA	PLAN: COOP DE DESARR (COOSALUD EPS) 2020 SUBSIDIADO		

El lucro cesante se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica, de contenido pecuniario, es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir, que no ingresará al patrimonio de la persona. Es decir, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es decir que si no se hubiese producido el daño el ingreso debía percibirse, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del “(...) perjuicio que el daño ocasionó (...). **Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir,**

“(...) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios

de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario”. (...).
(Subrayado y negrilla fuera del texto original)².

Así mismo, en Sentencia del 24 de junio de 2008, la misma corporación afirmó que:

“(…) En cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado (...).

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (...).

Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables”.³
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Esto significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso, siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado, en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo se reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

“La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (...).

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de junio de 2018. Expediente SC 2107-2018.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 2008. Radicado 2000-01121-01.

Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante”.
(Énfasis propio).

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. Descendiendo al caso objeto de estudio, debe manifestarse que el señor **JUAN GUALI REMIGIO**, pretende el reconocimiento del lucro cesante consolidado y futuro en cuantía de **\$220.252.000**, derivado de las lesiones que le produjo el accidente de tránsito, sin aportar contrato laboral, desprendibles de pago, afiliación al Sistema de Seguridad Social en el régimen contributivo, que acreditara la respectiva vinculación del demandante.

En conclusión, al no haberse aportado prueba siquiera sumaria que permita acreditar (i) la ganancia dejada de percibir como consecuencia del hecho dañoso, y, (ii) la actividad económica que desarrollaba el señor **JUAN GUALÍ REMIGIO**, no resulta procedente la pretensión impetrada en el libelo genitor, según la cual, debe reconocerse y pagarse en favor de la parte actora sumas de dinero por la modalidad de lucro cesante.

5. LOS PERJUICIOS MORALES DEPRECADOS POR EL EXTREMO ACTOR, DESCONOCEN LOS LÍMITES JURISPRUDENCIALES ESTABLECIDOS POR EL MÁXIMO ÓRGANO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

La tasación propuesta del daño moral es exorbitante y en tal virtud, no puede ser tomada en cuenta por el Despacho. La pretensión resulta excesiva al cuantificarse en cien (100) SMLMV, para el demandante sin que milite en el dossier prueba alguna donde se evidencie una lesión igual o superior al **50%**.

Es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan exorbitantes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado, para la tasación de dichos perjuicios. En efecto, la Corporación ha fijado como límite indemnizatorio en caso de lesiones que generan una lesión igual o superior al 50%, el siguiente:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Frente a los perjuicios morales solicitados en el libelo de la demanda, es preciso señalar que el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmateriales, sostuvo lo siguiente:

“La reparación moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.
(...)

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%, a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; **a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20%** y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior a 10%”. (Énfasis propio).

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en la suma pretendida por la parte demandante. Solicitar cien (100) SMLMV, para la víctima, resulta a todas luces exorbitante. Lo anterior, por cuanto de la historia clínica allegada a la foliatura no se desprende una lesión que implique una gravedad igual o superior al 50%. Máxime cuando ni siquiera existe dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que determinara un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ni del Instituto Nacional de Medicina Legal, que comprobara la existencia de secuelas permanentes en el actor. En tal virtud, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo que no puede convalidar el despacho.

En conclusión, es inviable el reconocimiento por daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir de la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. De ese modo, en tanto las sumas solicitadas en las pretensiones de la demanda desconocen los lineamientos establecidos por esa corporación, deben ser desestimadas.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

6. OPOSICIÓN FRENTE AL DAÑO A LA SALUD.

ME OPONGO al reconocimiento del daño a la salud que se solicitó en la demanda por el equivalente de **300 SMMLV**, a favor de la víctima directa. Lo anterior, por cuanto no hay elementos de juicio que permitan sostener que las lesiones que tuvo el señor Ramírez son equivalentes a las que sufre una persona que es declarada en estado de invalidez. Por este motivo, desde luego, no puede reconocérsele el máximo indemnizatorio.

Es menester indicar que, analizando el caso en concreto, dentro del expediente se solicita una indemnización por esta tipología de perjuicios bajo una premisa completamente errada, en la medida de que, al momento de estimar su solicitud, se desatendieron completamente los topes máximos de indemnización fijados por el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para la tasación del daño a la salud:

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de la lesión	Víctima directa
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

En tal virtud, la solicitud elevada en el escrito de demanda se encuentra tasada de forma exorbitante, como quiera que desconoce completamente los parámetros fijados por el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud elevada en el escrito de demanda corresponde a trescientos (300) SMLMV, para la víctima directa del supuesto accidente, sin que en el expediente milite dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal que, de cuenta de secuelas de carácter permanente, ni dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que determine pérdida de capacidad laboral del **50%**. Tampoco hay prueba médica que acredite que las lesiones que tuvo el señor **JUAN GUALI REMIGIO** son equivalentes a las que sufre una persona que es declarada en estado de invalidez. Por ese motivo, desde luego no puede reconocérsele el máximo indemnizatorio.

Así las cosas, ante la desmesurada solicitud del daño a la salud estimado en trescientos (300) SMLMV, para la víctima directa, es claro que no podrá proceder tal pretensión, toda vez que es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación de este perjuicio, en tanto, el mismo resulta claramente exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva del supuesto daño a la salud que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado, en el Acta del 28 de agosto de 2014.

En conclusión, es desacertada la petición de reconocimiento del daño a la salud en la suma pretendida por la parte demandante, siendo exorbitante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado.

7. GENÉRICA O INNOMINADA.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda y al llamamiento en garantía, que se origine en la ley o en el contrato con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso, el cual expresa: “*Artículo 282. Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda*”.

Conforme a la norma transcrita el juez deberá declarar probadas las excepciones que oficiosamente encuentre acreditadas, por lo que en el evento de encontrarse fundamentos que derroten las pretensiones y no hubieran sido alegados por las partes, solicito se sirva declararlas mediante sentencia.

CAPÍTULO II CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

En este acápite se desarrollará lo concerniente al llamamiento en garantía formulado por el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, en virtud del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, documentado en la Póliza No. **420 – 80 - 994000000181**, procediendo a contestar así:

I. FRENTE AL HECHO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

FRENTE AL HECHO PRIMERO: no es un hecho que sirva de fundamento al llamamiento en garantía, pero es cierto que el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, figura como demandado en el proceso de reparación directa que hoy nos ocupa la atención, el cual fue impetrado por el señor **JUAN GUALÍ REMIGIO**. Proceso que se identifica bajo el radicado No. 76001-33-33-017-2022-00175-00.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: no es un hecho que describa, pruebe o acredite la existencia de una relación sustancial entre el llamante en garantía y el llamado. Es la manifestación que la parte actora pretende el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, morales y daño a la salud, por el accidente acaecido el 17 de noviembre de 2020, donde presuntamente resultó lesionado el señor **JUAN GUALÍ REMIGIO**.

FRENTE AL HECHO TERCERO: no es un hecho. Corresponde a la pretensión del llamamiento

en garantía.

Sin embargo, es oportuno destacar desde ya, que el contrato de seguro no opera de forma automática, sino con estricta sujeción a las especiales condiciones generales y particulares que rigen la relación aseguraticia. Adicionalmente, en el caso concreto el mismo no puede hacerse efectivo, toda vez que no se ha acreditado la existencia de un siniestro en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio.

FRENTE AL HECHO CUARTO: es cierto que para amparar la responsabilidad civil extracontractual, el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, tomó contrato de seguro documentado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 – 994000000181**, certificado No. 1, expedida por la líder, Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en coaseguro con Chubb Seguros Colombia S.A., SBS Seguros Colombia S.A., y HDI Seguros S.A., cuya vigencia está comprendida desde el 23 de junio de 2020, hasta el 19 de mayo de 2021. Sin embargo, es oportuno destacar desde ya, que el contrato de seguro no opera de forma automática, sino con estricta sujeción a las especiales condiciones generales y particulares que rigen la relación aseguraticia. Adicionalmente, en el caso concreto el mismo no puede hacerse efectivo, toda vez que no se ha acreditado la existencia de un siniestro en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 – 994000000181**, certificado No. 1, con fundamento en la cual el Distrito Especial de Santiago de Cali, vinculó a las aseguradoras al proceso, no puede hacerse efectiva pues no se ha realizado el riesgo asegurado, esto es, no existe acción y/u omisión por parte del ente territorial, que generara el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor **JUAN GUALI REMIGIO**, todo lo contrario, se encuentra demostrado el hecho determinante de un tercero, al conducir con la observancia de las normas de tránsito, según lo confesado en el libelo introductorio.

Ahora, si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo respecto de mi representada, pese a la evidente ausencia de responsabilidad de la entidad territorial que realizó el llamado en torno a los hechos de la demanda, comedidamente solicito que se verifique por parte del señor juez, circunstancias como: **i) límites y coberturas acordadas, ii) coaseguro, iii) deducible y iv) la totalidad de condiciones particulares y generales de la póliza y sus respectivas exclusiones.**

III. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

1. NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO PORQUE NO HAY RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

No existe exigibilidad de la obligación indemnizatoria a cargo de mi prohiljada, respecto de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 - 994000000181**. Por cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado y amparado en la póliza, esto es, la realización del hecho dañoso imputable al asegurado, acaecido dentro de la vigencia de la póliza, en razón de la

Responsabilidad incurrida de acuerdo a la legislación vigente. Lo anterior, en concordancia con las condiciones particulares de la póliza en cuestión, que menciona como objeto:

“Amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades”.

Ahora bien, el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro: “**ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO.** *Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.*” (Subrayado fuera del texto original).

De tal suerte que al demostrarse en este proceso la inexigibilidad de responsabilidad del asegurado, toda vez que: primero, la ausencia de prueba de la falla en el servicio. Segundo, tampoco se encuentra en este proceso prueba que acredite el hecho generador del daño que aquí se alega. Tercero, no hay prueba del nexo de causalidad que vincule las lesiones sufridas por el demandante, con actuación alguna del **Distrito Especial de Santiago de Cali**, desvirtuando cualquier nexo causal que pretenda endilgar la parte demandante.

Así las cosas, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional en cabeza de mi mandante, por cuanto no hubo lesión física o daño atribuible al **Distrito Especial de Santiago de Cali**. Por cuanto, como se ha desarrollado a lo largo del presente escrito, el proceso se trata de un accidente de tránsito por la presunta omisión en el mantenimiento y señalización de la calle 121 Bis con carrera 28 D del barrio Pizamos 3 de la ciudad de Cali, situación que fue propiciada por el conductor del campero de placas HJE – 513, al desplazarse sin el cumplimiento de las normas de tránsito. Sin embargo, decidió poner en riesgo su vida e integridad física y la de los usuarios de la vía. En consecuencia, no existe realización del riesgo asegurado en el presente asunto, toda vez que no hubo lesión causada por el asegurado, pues de las documentales obrantes en el proceso se pudo establecer que no existió daño atribuible al extremo pasivo del litigio.

Así mismo, no existe prueba en el proceso que acredite que las lesiones sufridas por el señor **JUAN GUALÍ REMIGIO**, obedecieran como consecuencia de la presunta, pero no probada omisión en el mantenimiento y señalización de la vía, o alguna acción u omisión del extremo pasivo del litigio. Así las cosas, y debido a que no existe responsabilidad en cabeza del demandado en este proceso, no ha surgido la obligación condicional del asegurador, en la medida que no se ha realizado el riesgo asegurado. Por todo lo anterior, no demostrada la supuesta falla del servicio en cabeza de la **entidad territorial**, no podrá bajo ninguna circunstancia afectarse la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 - 994000000181**, y surgir obligación alguna a cargo de mi prohiljada.

2. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE MÍ REPRESENTADA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 420 – 80 - 994000000181, EL CUAL SE VA AGOTANDO EN LA MEDIDA DE CADA SINIESTRO O INDEMNIZACIÓN QUE SE PAGUE.

De manera ilustrativa y sin aceptar responsabilidad alguna, se informa que el contrato de seguro pactado tiene unos montos máximos, tanto por evento como por vigencia del seguro. Respetuosamente se solicita tener en cuenta el clausulado, porque como lo indica el doctrinante Ossa, dichas estipulaciones “*están destinadas a delimitar, de una parte, la extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir*

la oportunidad y el modo de ejercicio de los derechos y la observancia de las obligaciones o cargas que de él dimanar”⁴.

En ese sentido, de acuerdo con el principio *pacta sunt servanda*, constituye ley para las partes los límites positivos (amparos) y los límites negativos (exclusiones) estipulados en el contrato de seguro. Así, la Póliza No. **420 – 80 - 994000000202**, contempla el siguiente tope por vigencia y evento:

“Descripción	amparos	Suma Asegurada
Predios, Labores y Operaciones	7.000.000.000	7.000.000.000”.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto, que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad la cual va hasta la concurrencia de la suma asegurada, tal y como lo dispone el artículo 1079 del Código de Comercio: “**ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. Así las cosas, el amparo cubierto para el caso que nos ocupa tiene un tope máximo de **\$7.000.000.000**, por evento y vigencia. Este valor se encontrará disponible de acuerdo con los siniestros que se hayan materializado en la vigencia de la póliza. El valor máximo se condiciona a que en la vigencia total de la póliza no se hubiere indemnizado por otras reclamaciones pagadas conforme a la Póliza No. **420 – 80 - 994000000181**. Lógicamente, este valor se va reduciendo con cada siniestro pagado judicial o extrajudicialmente. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto la responsabilidad de la aseguradora se limita a dicha suma.

Lo anterior sin perjuicio de los sublímites establecidos en el condicionado general de la póliza.

3. LA OBLIGACIÓN DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., SE CIRCUNSCRIBE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL COASEGURO Y LA INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE LAS COASEGURADORAS.

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción a la cuantía de su participación porcentual, de acuerdo al coaseguro concertado en la Póliza.

Debe señalarse señor juez, que la relación sustancial entre el demandado Distrito Especial de Santiago de Cali y **CHUBB Seguros Colombia S.A.**, surge en el contrato de seguro documentado en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420-80-994000000181**, en el cual obra como coaseguradora líder ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. Así las cosas, el llamamiento efectuado a mí defendida se basa en un contrato de seguro, el cual fue tomado en un tipo contractual denominado coaseguro, el cual se presenta cuando el asegurado promueve o asiente la celebración de un acuerdo entre dos o más aseguradoras, con el fin de distribuir entre ellas el interés y riesgos asegurados. Cuya formalización además está sometida a la obligatoria reunión de las condiciones establecidas en el artículo 1094 del aludido código, aplicable por remisión expresa del mismo artículo 1095. Es decir,

⁴ Ossa G. J., Efrén. Teoría General del Seguro: El contrato. Editorial Temis. 1991.

se requiere que concurren "(...) 1. *Diversidad de aseguradores*; 2. *Identidad de asegurado*; 3. *Identidad de interés asegurado*, y 4. *Identidad de riesgo*".

En este orden de ideas, puede afirmarse que quienes participan en un coaseguro son un conjunto de compañías de seguros, entre las cuales no existen relaciones recíprocas de aseguramiento, pues tales aseguradoras asumen responsabilidades individuales frente a un mismo riesgo, cuya iniciativa nace del asegurado que quiere hacerlas partícipes o de una de estas con la aceptación del interesado, para efectos de hacer la repartición del riesgo.

Como usted podrá observar en la carátula de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 - 994000000202**, mi prohijada **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, asumió el **28.00%** de la participación en el negocio jurídico asegurador, de igual manera obsérvese el porcentaje que asumió cada compañía aseguradora:

Compañía Aseguradora	% de Participación
CHUBB SEGUROS COLOMBIA	28.00%
SBS SEGUROS	20.00%
COLPATRIA SEGUROS	10.00%
HDI SEGUROS S.A.	10.00%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.	32.00%

Dada la existencia del coaseguro, cada compañía de seguros asumió un porcentaje determinado, destacándose que ni siquiera en el improbable caso de que fueran viables las pretensiones de la parte actora y las que contiene el llamamiento en garantía, podría condenarse a mi representada por lo que les corresponde a las otras coaseguradoras. Se reitera, como quiera que en el coaseguro las aseguradoras no son responsables de forma solidaria, como se desprende del artículo 1092 del Código de Comercio, pues cada una responderá por el porcentaje de participación en el contrato de seguro.

La figura del coaseguro, como se manifestó en el párrafo precedente, se encuentra regulada en el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual establece: *“En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, **los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos**, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad”*. (Subrayado fuera de texto).

Lo estipulado en la norma en cita se aplica al coaseguro, por estipulación expresa del artículo 1095 del mismo estatuto, que establece: *“Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al **coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro**”*. (Subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado, en reciente jurisprudencia⁵ preciso que no existe solidaridad entre las coaseguradoras, en los siguientes términos:

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 53742.

“(…)

18.1.- En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio:

<<La jurisprudencia ha reconocido que en casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente. De hecho, ha indicado que en casos de coaseguro <<el riesgo, entonces, es dividido en el número de coaseguradores que participan del contrato, en las proporciones que entre ellos dispongan, sin que se predique solidaridad entre ellos>>”.

(Subrayado fuera de texto).

Se colige de la anterior cita, que en caso de una eventual condena en contra de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, frente a los riesgos cubiertos por la póliza, el juzgador deberá limitar la cuantía de la misma en contra de mi procurada al porcentaje de participación que ella tiene en virtud del coaseguro, que en el caso estudiado corresponde al 28.00%, por cuanto no existe solidaridad entre las coaseguradoras, debiendo responder cada una por el porcentaje de participación otorgado al asegurado.

4. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

El carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, frente al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato”.

El artículo 1127 del Código de Comercio, establece lo siguiente:

“Art. 1127. Definición de seguro de responsabilidad. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 84. El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”.

No debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de la demanda por concepto de: perjuicios morales y daño a la salud, no son de recibo por cuanto su reconocimiento

implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización que nada tuvo que ver con la lesión padecida por la víctima directa. En efecto, toda vez que el accidente de tránsito acaeció por el hecho exclusivo de la víctima al conducir con exceso de velocidad, con lluvia y en horas de la noche.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciendo a los demandantes.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiende a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la parte actora.

5. EL PAGO AL QUE REMOTAMENTE SEA CONDENADA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DEBERÁ EFECTUARSE POR REEMBOLSO.

Sin perjuicio de reconocimiento de responsabilidad por parte de nuestro asegurado, en el remoto e hipotético caso en que se produzca una sentencia condenatoria y se decida afectar el contrato de seguro, la compañía aseguradora solo estaría en la obligación de responder bajo la figura del reembolso, teniendo en cuenta que el **Distrito Especial de Santiago de Cali**, es la tomadora de la póliza. Por tal motivo, una vez el asegurado **Distrito Especial de Santiago de Cali**, proceda con el pago a los demandantes, de allí se desprendería la obligación de la compañía de reembolsarle lo pagado, atendiendo las particularidades de la póliza, en especial, el límite y sublímite asegurado, coaseguro y el deducible pactado.

6. CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LO SOLICITADO EN EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que en el mismo no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la aseguradora que represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud de la cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los despachos.

Sobre este particular, el artículo 281 del Código General del Proceso contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

á, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas”.

En virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandando por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido. ii) Tampoco se pueden emitir fallos extra *petita*, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el petitum de la demanda. En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado:

“La jurisprudencia de esta Corporación **ha definido el principio de congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.** Además, ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

(...)

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. **Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita)**, pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. **El principio de congruencia de la sentencia además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de**

cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello”¹⁴. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el juez al momento de fallar no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas. Es claro entonces que la sentencia que resuelve la demanda está sometida al principio de congruencia. Así las cosas, se evidencia a través de preceptos legales y jurisprudenciales que el juez está en la obligación de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro de las actuaciones judiciales, a las partes intervinientes en el proceso, en el sentido de no proferir sentencia sobre aspectos adiciones a los solicitados por las partes, o que no hayan sido solicitados.

Teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado, ahora es necesario aterrizar la teoría al caso concreto. Se evidencia en el escrito del llamamiento que el mismo no contiene pretensiones formuladas en contra de la compañía de seguros que represento, desconociendo lo consignado en el artículo 82 del Código General del Proceso, así como lo señalado en el artículo 65 del mismo Código, que determina que *“La demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y demás normas aplicables”*.

Conforme a lo anterior, de la lectura del escrito de llamamiento no se evidencia ninguna pretensión en la cual se solicite hacer efectiva la póliza de seguro emitida por la líder **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, dentro de la cual mi prohijada funge como coaseguradora, por lo que en cualquier caso ello resultaría improcedente. Razón por la cual, el Juez no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de la compañía aseguradora que represento, cuando es claro que el llamante en garantía en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro emitida.

En conclusión, se evidencia como en el presente asunto el llamante no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 82 del Código General del Proceso para la presentación del llamamiento en garantía, desconociendo también entonces lo señalado en el artículo 65 del mismo Código, que determina que *“La demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y demás normas aplicables”*, pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello, que, bajo el principio de congruencia, al juez no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de la póliza de seguro expedida por mi representada. Razón por la cual, el juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, y de la lectura de este último documento, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la póliza en mención. Por lo que no procederá reconocimiento de emolumento alguno.

7. EXCLUSIONES DE AMPARO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 420 – 80 – 994000000181.

Sin perjuicio de reconocimiento de responsabilidad por parte de nuestro asegurado, en el remoto e hipotético caso en que se produzca una sentencia condenatoria y se decida afectar el contrato de seguro, el despacho deberá tener en consideración que en el contrato de seguro se pactaron algunas exclusiones de amparo que de presentarse relevan a la compañía aseguradora de la obligación de pagar cualquier indemnización.

Es menester resaltar lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020⁶, quien se refirió sobre éstas, de la siguiente

⁶ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

manera:

Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, **el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente**, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro – Subrayado fuera del original.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se exhorta a los Jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 - 994000000181**, en la sección segunda de las Condiciones Generales.

En consideración a lo expuesto, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones pactadas las que constan en las condiciones generales y particulares de la Póliza No. **420 – 80 - 994000000181**, estas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la Jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

8. GENÉRICA Y OTRAS.

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso ya sea frente a la demanda o incluso ante el llamamiento en garantía, incluida la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso, el cual expresa: “*Artículo 282. Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda*”.

Conforme a la norma transcrita el juez deberá declara probadas las excepciones que oficiosamente encuentre acreditadas, por lo que en el evento de encontrarse fundamentos que derroten las pretensiones y no hubieran sido alegados por las partes, solicito se sirva declararlas mediante sentencia.

CAPÍTULO III

MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS Y SOLICITADOS

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

- **DOCUMENTALES QUE SE APORTAN:**

Respetuosamente solicito se tengan como tales las que obran en el proceso, y especialmente:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
2. Escritura pública No. **1599** del 24 de noviembre de 2016, por medio de la cual se confiere poder general al suscrito.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, expedido por la Superintendencia financiera de Colombia.
4. Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **420 – 80 - 994000000181**, expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, (Carátula, Condicionado Particular y General), la cual ya milita en el expediente.

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

1. INTERROGATORIO DE PARTE:

Ruego a su Despacho se decrete el interrogatorio de parte del señor **JUAN GUALI REMIGIO** de un cuestionario escrito que remitiré al Despacho antes de la fecha fijada para esta diligencia o de las preguntas que verbalmente le formularé durante la misma sobre los hechos narrados en la demanda.

2. OPOSICIÓN A FOTOGRAFÍAS APORTADAS CON LA DEMANDA:

Si bien el apoderado del extremo activo arrimó al plenario un registro fotográfico para tratar de ilustrar la situación narrada, debe advertirse desde ahora que al mismo no se le podrá asignar valor probatorio alguno. Lo anterior, toda vez que no reúne los requisitos mínimos para ello, los cuales son: i) origen, ii) lugar, iii) época en que fue tomada, iv) reconocimiento o ratificación, y v) autenticidad y certeza, tal como lo refirió el Honorable Consejo de Estado⁷:

“Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegadas al proceso por el demandante, y que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no se puede determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso (...) se tiene que las fotografías son pruebas documentales que el juez está en la obligación de examinar bajo el criterio de la sana crítica, siempre y cuando se hayan verificado que los requisitos formales para la valoración de este tipo de medios probatorios, esto es, la autenticidad y la certeza de lo que se quiere representar”.

Conforme a la cita anterior, las fotografías allegadas con el libelo introductorio solamente muestran imágenes de una vía, pero no arroja ninguna luz o explicación de los hechos de la demanda, ni mucho menos el nexo de causalidad entre el daño y la presunta pero no probada omisión del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, sin contar que no se tiene certeza de que realmente sean de esa época, por lo que no demuestran condiciones de tiempo, modo y lugar, así pues, no son elementos probatorios válidos, convirtiéndose en pruebas inútiles para el presente proceso, toda vez que no prestan un servicio útil al convencimiento del juez por su absoluta falta de idoneidad.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Subsección C, Radicación No. 08001-23-31-000-1997-11812-01 (27353), Sentencia del 13 de junio de 2013.

CAPÍTULO IV
NOTIFICACIONES

El suscrito en Avenida 6 A Bis No. 35 N - 100, Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali, (V), o en la dirección de correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Del señor juez,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA.

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá, D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.